

La desigualdad global supone ser una cuestión autoevidente. Las sociedades tienen diversas culturas, desencadenan procesos históricos diferenciados y operan su subsistencia por procesos productivos donde se hilvanan recursos y técnicas propias con estrategias foráneas. Sin embargo, la desigualdad no se trata solo de condiciones prácticas de vida, sino de ventajas diferenciales de acceso a derechos, bienes y servicios de subsistencia y confort, dentro de las sociedades y entre unas sociedades respecto de otras, mediadas sus relaciones por instancias de producción, consumo y disposición de capital de acumulación. La desigualdad global suele medirse en función comparativa a través de variables como el producto bruto interno, los indicadores de salud, educación y consumo, las tasas de natalidad y mortalidad, la inserción relativa en el comercio exterior, las estrategias probables de adaptación a situaciones de riesgo, el compromiso ambiental y la capacidad bélica, entre otras tantas. Sin embargo, la desigualdad global no coincide necesariamente con la distribución de la renta global, ni mucho menos con la distribución de la renta interna o local.

La distribución de la renta global se diferencia de la distribución de la renta entre países. Una se refiere a la distribución de la riqueza mundial que se establece en base al porcentaje de acumulación bruta global obtenida de sectores del trabajo, la producción y la inversión financiera internacional y, la otra, a la capacidad diferencial de producción y acumulación de capital de cada Estado. El desplazamiento de recursos económicos locales hacia grupos económicos más aventajados, locales o transnacionales, que a su vez externalizan sus rentas a economías neurálgicas -por estabilidad o porque históricamente les garantizan su rentabilidad sostenida- da cuenta de procesos por los que se redistribuye la renta global y por los que se afecta la distribución de la renta entre países y al interior de estos.

La desigualdad internacional en guarismos puede disminuir, porque al reducirse a una mensura global, la magnitud del crecimiento económico de algunas sociedades -como por ejemplo con el caso de China e India- pueden sugerir un supuesto plausible, pero la inequidad global demuestra una desigualdad mayor porque tiene en cuenta tanto las desigualdades dentro del país como entre países, tal cual lo manifiesta el coeficiente de Gini a nivel global.

Sutcliffe² señalaba que hacia el año dos mil, la división Norte-Sur marcaba que el Sur tenía una mayor tasa de morbimortalidad infantil y de decesos por desastres naturales, como asimismo, una mayor cantidad de población rural, mayor crecimiento poblacional y mayor cantidad de problemas sanitarios con déficit en los sistemas de salud y profilaxis poblacional, pero que a su vez tenía menor actividad productiva e industrial, menor concentración demográfica urbana, menor distribución de la renta per cápita (exponiendo condiciones de inequidad social), además que producía menor emisión de CO₂, tenía menor gasto sanitario, menor cantidad de exportaciones (con el consiguiente déficit en la balanza de pagos) y, exponía menor gasto militar (con la consiguiente exposición a las potencias gendarmes).

Nueve de cada diez partes de los recursos económicos mundiales destinados a sanidad eran gastados en el 8% de la población mundial y, los países habitados por el 20% de la población mundial recibían el 60% de la renta global, pero a su vez estos disponían del 80% del comercio mundial y de la mayor proporción del gasto militar. Estos datos resultaban contundentes para graficar que hacia el principio del milenio las diferencias Norte-Sur eran elocuentes.

Asimismo, es notorio que la globalización y el cambio tecnológico hayan llevado asociada una creciente desigualdad en la distribución de los salarios, incluso especialmente en los países desarrollados. La fase actual del desarrollo capitalista, denominada fase monopólica de base mundial expone la desigualdad estructural de las sociedades. En esta fase, la capacidad de generar rentas monopólicas por parte de los grandes consorcios empresarios, les permite apropiarse de beneficios extraordinarios al capital concentrado. Las empresas de este modo tienen un creciente poder de negociación a expensas de los trabajadores y de los pequeños proveedores, así como de los gobiernos e instituciones políticas, lo cual les permite influir en las variables que afectan la distribución de los salarios, los precios, los impuestos o las regulaciones sobre las actividades que los afectan.

¹ Profesor adjunto regular del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de los cursos de Sociología del Derecho, Sociología Crítica y, Control Social en Contextos de Cambios Globales y Regionales. Profesor contratado de Posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de la materia Acceso al Sistema Legal de la Maestría en Sociología Jurídica (modalidad a distancia). rhdonzis@gmail.com

² Sutcliffe, Bob: Cien imágenes de un mundo desigual. Icaria- Oxfam, Barcelona 2005.

Además, desde la década de los '80, las políticas redistribucionistas orientadas por los progresismos desde el fin de la 2da. Guerra mundial, fueron opacadas por las políticas de la agenda neoliberal implantada a nivel global. Desde entonces, ha operado también el criterio del votante decisivo (el de alto poder económico), que consigue comulgar las preferencias del voto, conforme las demandas y perspectivas de los estratos más ricos, capitalizando en su favor el desazón de los más postergados. Además, se ha producido una acentuación del conformismo automático y una creciente aceptación social de las distancias salariales entre ejecutivos y trabajadores.

Por otra parte, merece atenderse que, en la última década también se ha acentuado en los países en desarrollo la falta de implementación de políticas públicas redistributivas, por bajo crecimiento o por el peso de sus respectivas deudas externas, por lo que se ha impedido que los gobiernos arbitren su capacidad para distribuir el ingreso procedente de las relaciones de producción. Esto ha generado una dinámica perversa de creciente concentración del ingreso al interior de los países, lo que opera en contra del registro de caída de la desigualdad global que se había conseguido en los '80.

La dinámica de desigualdad durante la globalización, caracterizada por la creciente internacionalización productiva en el marco del capitalismo neoliberal, sumada a la inserción de la Semiperiferia en la economía mundial (China e India), muestran una acentuación de la distribución de la renta en favor de una nueva clase emergente global, al mismo tiempo que persiste la polarización en la distribución del ingreso mundial.

En los últimos veinte años antes de la crisis financiera internacional del 2007, la única emergencia de clase se dio en los países de sudeste asiático, Corea y en algunas poblaciones de las ciudades de mayor concentración demográfica de China. A la vez, en el mismo periodo se dio un aumento muy elevado de la renta en favor del 5% más rico del mundo, constituido por sectores de acumulación de capital tanto de países desarrollados como en desarrollo. En cambio, los que más han perdido durante la globalización, resultan los sectores más pobres del planeta y las clases medias tanto de los países más ricos como de los que están en desarrollo, quienes vieron decrecer paulatinamente el poder de compra de sus ingresos y su capacidad de acumulación de ahorro.

Milanovic, pone atención en los cambios en las variables de ingreso en el ámbito mundial -de ésta última etapa de capitalismo neoliberal globalizado-, en la que emerge la Semiperiferia, desplazando en renta a los sectores industrializados de países más ricos. En esta etapa ve que operó una estrategia que incrementó el poder de los rentistas, concentrando el beneficio financiero. Si bien la renta media global se incrementó por el crecimiento de China e India, lo que hizo suponer un descenso de la desigualdad global, lo cierto es que se incrementó la desigualdad en el interior de los países, tanto ricos como pobres, como así también en los emergentes. Pero esa caída en la desigualdad global no ha implicado distribución equitativa del crecimiento, ya que desde 1980 a 2016 el 1% más rico de la población mundial capturó el doble de crecimiento del ingreso, respecto del que tuvieron el 50% de la población más pobre del planeta.

Hacia el 2015 el 1% de la población más rica del mundo acaparaba el 20% de la renta global y, el 50% más pobre, solo el 9% (Oxfam).

Por lo tanto, desde el principio de este siglo subsisten grandes disparidades entre individuos de diferentes países, aún situados dentro del mismo percentil de renta. Las diferencias en la distribución del ingreso en el interior de los países, condiciona la desigualdad global a la vez que tales diferencias exponen a distintos niveles de bienestar o pobreza a los contingentes según donde vivan.

Thomas Piketti ve en la concentración de la riqueza la principal causa de la creciente desigualdad, y afirma que ésta es inherente al propio sistema capitalista, en cuanto ofrece un crecimiento más elevado a las rentas de capital sobre las riquezas heredadas, las que aumentan en mayor velocidad que la producción de ingresos.

Entre el 2010 y el 2020, se ha seguido acumulando riqueza en forma creciente en el 1% de la población mundial, respecto del 99% restante (Oxfam).

Según el Credit Suisse (2018) hacia el 2017 el 70% de la población mundial concentraba solo el 3% de la riqueza global y el 1% más rico acaparaba el 45%³.

Dentro de todo ese desborde de desigualdades deviene la crisis sanitaria mundial del Covid19, generando un estado de excepcionalidad global inaudito en todo el proceso de civilización. No solo se trató de la aparición intempestiva de una pandemia con un grado de expansión y de intercepción infecciosa inaudita, sino también de una reestructuración intempestiva de las relaciones sociales, de las condiciones operativas y de las disposiciones jurídico-políticas a nivel local y global.

Pero más allá de las exigencias, disposiciones y estrategias sanitarias empleadas para gestionar la pandemia, la situación de excepcionalidad global ha operado en un fabuloso desplazamiento de recursos económicos, con particular impacto desde los capitalismos periféricos a los centrales, acentuando una distribución inequitativa de la renta global. Lo que ha acontecido es una redistribución de la renta hacia sectores altamente integrados en áreas de control estratégico de grandes empresas transnacionales de capital concentrado, especialmente, la de los laboratorios que desarrollaron, produjeron y resguardaron con patentes las vacunas; la de las matrices tecno informáticas que consolidaron su control operativo de todas las variables

3 Cairo i Céspedes (coord.): Economía Mundial, Deconstruyendo el Capitalismo. Ed. Universidad de Barcelona. 2020.

de la vida social y de los requerimientos institucionales; y la del circuito bancario y financiero transterritorial, que afianzó su articulación logística en las relaciones de consumo. Este tipo de transferencias económicas forzadas, que resultaron ineludibles para poder hacer frente a la demanda sanitaria de la excepcionalidad pandémica, se ha traducido inexorablemente en una mengua pronunciada del bienestar social para las poblaciones con mayores necesidades relativas, en cuanto al acceso a recursos para sus sustento, provocando consecuentemente, ya sea por fragilidad estructural o por la falta de disposición crediticia, restricciones pronunciadas al crecimiento de sus economías, principalmente de aquellas más expuestas por crisis de deuda externa. En forma consiguiente, se han acentuado y se han generado nuevos problemas de redistribución local de la renta, ocasionándose una intensificación de las tensiones entre sectores en puja (sectores de la renta financiera, sectores de la renta productiva, sectores asalariados y sectores excluidos dependientes del subsidio del aparato público).

Aún con repuntes en la productividad durante 2021, son pocas las economías que han podido compensar la parálisis operativa del 2020 y el esfuerzo de las arcas públicas para sortear el escollo pandémico, acudiendo a empréstitos externos o intensificando la expansión monetaria.

De tal forma que las instrumentaciones jurídicas de asistencia económica a empresas e individuos, regulaciones restrictivas del trabajo, congelamiento de tarifas y fluidez aduanera entre otras, que han sido adoptadas durante las exigencias más duras de la pandemia, se han visto exigidas en postergación, adecuación o segmentación en el pasaje hacia la nueva normalidad de las sociedades, en la medida que el trastorno pandémico fue cediendo. Todo ello de acuerdo con los potenciales productivos y de solvencia crediticia de cada sociedad.

Un dato paradójico para tener en cuenta es que, durante las últimas décadas previas a la excepcionalidad pandémica, las naciones supuestamente se habían vuelto más ricas, mientras que los gobiernos se fueron volviendo más pobres. Una forma para entender estas desigualdades nos exige observar la brecha entre la riqueza neta de los gobiernos y la riqueza neta del sector privado en determinado periodo. Entonces, uno puede destacar que, durante los últimos 40 años, los países se han vuelto significativamente más ricos, pero sus gobiernos se han vuelto significativamente más pobres. La participación de la riqueza en manos de los actores públicos se acercaba a cero o era negativa en los países ricos, lo que significaba que la totalidad de la riqueza se iba acaparando en manos privadas. Justamente, esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis del COVID, durante la cual los gobiernos tomaron prestado el equivalente al 10-20% del PBI, esencialmente del sector privado. La escasa riqueza actual de los gobiernos tiene importantes implicaciones para las capacidades estatales de abordar la desigualdad en el futuro, así como los desafíos clave del siglo XXI, como lo es el cambio climático. La desigualdad en la distribución de la riqueza global resulta ostensible, y reporta que ha aumentado en proporción para los sectores de mayor acumulación de ahorros y superiores ingresos de la población mundial. Pero hay que destacar también que, el aumento de la riqueza privada asimismo ha sido desigual dentro mismo de los países y a nivel mundial. Los multimillonarios mundiales han capturado una parte desproporcionada del crecimiento de la riqueza mundial durante las últimas décadas: el 1% superior se llevó el 38% de toda la riqueza adicional acumulada desde mediados de la década de 1990, mientras que el 50% inferior capturó solo el 2%. Esta desigualdad se debe a una grave inequidad en las tasas de crecimiento entre los segmentos superior e inferior de la distribución de la riqueza. La riqueza de las personas más ricas del mundo ha crecido entre un 6% y un 9% anual desde 1995, mientras que la riqueza promedio ha aumentado un 3,2% anual. Desde 1995, la participación de la riqueza mundial propiedad del 0,01% más rico creció del 7% al 11% y, la participación de la riqueza en manos de multimillonarios también se disparó durante este período (del 1% al 3%) aumento que se exacerbó durante la pandemia de COVID. De hecho, el 2020 marcó el aumento más pronunciado registrado en la participación de los multimillonarios en la riqueza del mundo. La proporción de la riqueza retenida por los multimillonarios del mundo aumentó del 1% de la riqueza total de los hogares en 1995 a casi el 3,5% en la actualidad. El umbral del 0,01% superior, compuesto por 520 000 adultos, pasó de 693 000 euros (PPA) en 1995 a 16 666 000 euros en la actualidad ⁴.

Por otra parte, analizando el Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (Índice CRI) OXFAM 2022⁵, que afirma que “la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades en todo el mundo”, pone de relieve “que la mayoría de los Gobiernos del mundo no ha mitigado este peligroso aumento de las desigualdades. A pesar de que se haya producido la mayor emergencia de salud pública mundial en un siglo, la mitad de los países de renta baja y media-baja redujo su porcentaje de gasto en salud durante la pandemia” y que, “el 70 % redujo su porcentaje de gasto en educación” así como “dos tercios de los países no incrementaron el salario mínimo en línea con el producto bruto interno (PBI)”. También ha puesto de relieve que “El 95 % de los países no ha aumentado la imposición a las empresas y personas más ricas. Al mismo tiempo que, un reducido grupo de Gobiernos de distintas partes del mundo ha contrarrestado esta tendencia, al haber tomado sólidas medidas para afrontar las desigualdades, dejando en evidencia al resto del mundo”.

4 La riqueza neta de los hogares es igual a la suma de los activos financieros (por ejemplo, acciones o bonos) y los activos no financieros (por ejemplo, viviendas o terrenos) propiedad de individuos, netos de sus deudas. Fuentes y series: wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. (2021) y actualizaciones.

5 constituye el primer análisis detallado que se haya publicado sobre las políticas y las medidas adoptadas por los Gobiernos para abordar la desigualdad durante los dos primeros años de la pandemia. Analiza las políticas y las medidas de gasto, fiscalidad y empleo de 161 Gobiernos entre 2020 y 2022.

El índice citado clasifica los esfuerzos de los Gobiernos en función de las medidas que han tomado en torno a tres ámbitos que son fundamentales para reducir los niveles de desigualdad: gasto social, fiscalidad y empleo. Sin embargo, hay algunos datos que no son halagadores:

- A pesar de que se produjo la mayor emergencia de salud pública mundial en un siglo, la mitad de los países relevados de renta baja y media-baja disminuyó su gasto en salud durante la pandemia.
- A pesar de la pobreza extrema que la pandemia ha acentuado de manera generalizada, la mitad de los países analizados en el Índice CRI restringió su gasto en protección social, y el 70 % ha reducido las asignaciones en educación.
- A pesar del desplome en la recaudación fiscal, y del enorme aumento de la riqueza de las personas y empresas más ricas durante la pandemia, 143 países de los 161 analizados no aumentaron la imposición fiscal a las personas más ricas, y 11 países les han aplicado inexcusablemente rebajas fiscales.
- Dos tercios de los países no han vinculado la subida del salario mínimo al producto bruto interno (PBI).
- Por otra parte, a los efectos propios de la pandemia se le ha sumado ahora la crisis del costo de la vida, que se ha ensañado con las personas de todo el planeta, sumiendo a millones al riesgo alimentario y diezmando las finanzas de los Gobiernos de todo el mundo. El aumento de los tipos de interés y un dólar fortalecido por la crisis bélica en la zona del mar negro, están exacerbando la ya de por sí profunda crisis de las deudas externas. En 2021, los países de renta baja y media-baja global, destinaron el 27,5 % de sus presupuestos al servicio de la deuda, lo que constituye el doble de su gasto en educación, cuatro veces su gasto en salud y cerca de 12 veces su gasto en protección social. Cada aumento del 1 % en los tipos de interés puede suponer 35 000 millones de dólares adicionales en pagos de intereses que los países de renta baja y media tienen que desembolsar a acreedores millonarios que detentan el capital financiero internacional.

Muchos gobiernos ni siquiera han mantenido la proporción de sus presupuestos asignados a sustentar gastos esenciales como la salud y la protección social durante la pandemia, lo que constituye de por sí mismo una afrenta al compromiso que tienen en proteger a su ciudadanía. Por el contrario, otros hicieron todo lo que pudieron para aumentar el gasto social, y así ayudar a su población para superar esta terrible experiencia. Pero en promedio, la asignación presupuestaria combinada para educación, salud y protección social recabada por el índice de Oxfam, ha caído en cerca de un punto porcentual; además, gran parte de los países han recortado tales asignaciones, y tan solo 19 la han incrementado en más de 5 puntos porcentuales. Ahora bien, desde la edición de 2020, el impacto promedio estimado en la reducción de las desigualdades del gasto destinado a luchar contra ellas ha aumentado ligeramente, pasando de un 18,4 % a un 19,4 %. Esto refleja que si bien a nivel general, el gasto social puede haberse reducido como porcentaje del presupuesto total, en varios países no ha caído como porcentaje del PBI o de la renta de las personas, dado que el PBI y los ingresos por la pandemia se han hundido incluso más, por lo cual la reducción de las desigualdades ha sido neutra.

Históricamente, en momentos de crisis, cuando las sociedades han tenido que aunar esfuerzos, los Gobiernos han aumentado su imposición a las personas más ricas, lo que constituye un indicio claro de solidaridad social. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos elevó los tipos impositivos sobre las personas más ricas a más del 90 %, con el fin de contribuir a sufragar los costes de la guerra, y también aplicó impuestos extraordinarios a los beneficios excesivos de las empresas. La crisis pandémica no consiguió tener tal grado de adhesión como para procurar un compromiso semejante.

Por otro lado, durante la pandemia de COVID-19, la recaudación fiscal de los impuestos al consumo se derrumbó por la paralización de las economías. Sin embargo, al mismo tiempo, la riqueza de las personas más ricas aumentó enormemente en todo el mundo, al igual que los beneficios empresariales. Lo cual parece que no tuvo concomitancia en una reevaluación del marco impositivo.

Las fortunas de los multimillonarios aumentaron a un ritmo prácticamente exponencial. Aun así, el análisis del Índice CRI muestra que la amplia mayoría de Gobiernos (143 de 161) no subió los impuestos a las personas más ricas durante la pandemia; y, aunque parezca increíble, 11 países les concedieron rebajas fiscales. Únicamente siete países decidieron hacer lo correcto e incrementar los impuestos a las personas más ricas con el fin de ayudar al conjunto de la sociedad a capear la pandemia y su impacto económico.

Por otra parte, la pandemia ha provocado una reducción de la recaudación fiscal, con una caída del 6,3 % promedio de la "productividad" fiscal, es decir, del porcentaje de impuestos recaudados por cada país en comparación con lo que debería recaudar, de acuerdo con los tipos impositivos establecidos en cada país. De cualquier forma, en promedio, los sistemas fiscales nacionales continúan siendo regresivos, incrementando la desigualdad en torno a un 1,5 %. Esta situación refleja la gran dependencia que la mayoría de los países tienen de los ingresos procedentes del IVA y la débil recaudación de impuestos progresivos sobre la renta. Los sistemas fiscales de 97 países del total relevado son de carácter regresivo. Como dato más positivo, dados los cambios en determinadas políticas y la reducción en la recaudación del IVA como porcentaje de los ingresos fiscales, los sistemas fiscales han seguido disminuyendo su carácter regresivo en 96 países durante la pandemia de COVID-19, y solo 58 se han vuelto más regresivos.

Además, la pandemia de COVID-19 ha tenido un enorme impacto negativo para las trabajadoras y los trabajadores mal remunerados en todo el mundo, especialmente las mujeres. Cientos de millones de personas se han visto sumidos en la pobreza. Si bien algunos países ricos y otros de mediano porte han sido capaces de destinar miles de millones a la protección social o conceder subvenciones a empresas para ofrecer apoyo a sus trabajadores y trabajadoras, lo que ha permitido

contener el desempleo, la mayoría de los países de renta baja y media no ha podido contar con esa alternativa.

La edición de 2022 del Índice CRI demuestra que la pandemia ha socavado más aún los derechos laborales. En dos terceras partes de los países, los salarios mínimos no se han equiparado al PBI per cápita, y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales (CSI) ha indicado que los derechos sindicales se han visto amenazados a causa de la pandemia. El único elemento positivo ha sido la introducción constante de nuevas legislaciones para promover los derechos de las mujeres y las diversidades.

De esta manera podemos apreciar que, la irrupción de la pandemia de COVID-19 y las posteriores crisis sociales, económicas y de salud pública han agravado la pobreza y las desigualdades. El mundo ha experimentado un drástico aumento de la pobreza por primera vez en décadas, mientras que la fortuna de las personas más ricas y los beneficios de las grandes empresas se han disparado. En 2022, una nueva crisis mundial ha relegado a un segundo plano la recuperación de la pandemia, desencadenando un drástico aumento de los precios de los alimentos y la energía, y agravando los problemas de inseguridad alimentaria, control del presupuesto y manejo de la deuda para muchos países de renta baja y media. Se está perfilando una crisis de la deuda en numerosos países del Sur, y al no aliviarse adecuadamente la carga de la deuda, se está conminando a muchos a la austeridad, lo que termina socavando el gasto que podría destinarse a afrontar las desigualdades. Al mismo tiempo, las grandes empresas, sobre todo de los sectores de la alimentación y la energía, están embolsándose enormes beneficios extraordinarios sin reportar mayor esfuerzo contributivo en materia fiscal. Además, el enorme incremento de las fortunas de los elencos más ricos del mundo durante la pandemia de COVID19 continúa prácticamente al margen de cualquier aumento impositivo.

¿Puede el derecho operar contra semejantes desigualdades?, el derecho solo puede ser una matriz instrumental para decisiones que exigen ser operadas a través de políticas públicas. Los sistemas territoriales están vaciándose de promesas igualitarias y solo se remiten a asegurar modestas oportunidades básicas para los justiciables. Las normas de derecho transterritorial de los derechos humanos, establecen nada más que principios orientativos que en el mejor de los casos son ponderados según coyunturas políticas. Aún con estas observaciones poco alentadoras, podemos rescatar ciertas medidas de carácter fiscal territorial que deberían ser de ineludible atención al respecto, por ejemplo:

a) aumentar el carácter progresivo de los impuestos sobre la renta empresarial y de las personas físicas que han de experimentar ingresos extraordinarios en un período, excluyendo su aplicación al salario, el que tiene por sobre todas las cosas carácter alimentario, estableciéndose en mínimo no imponible equivalente al salario de un magistrado judicial, gravándose consecuentemente solo la diferencia.

b) Reducir las exenciones, incentivos y créditos fiscales para las grandes empresas y las personas más ricas que externalicen su renta.

c) Conminar a las empresas y a los particulares a efectivizar el ingreso del 80% la renta de exportación dentro del ejercicio anual para su reinversión o ahorro dentro de la economía nacional, pudiendo solo externalizar el saldo restante cumpliendo con las contribuciones fiscales respectivas.

d) Aplicar “impuestos solidarios” a las personas más ricas, e “impuestos sobre los beneficios extraordinarios” de forma permanente a todas las grandes empresas que obtengan beneficios excesivos, sobre todo como resultado del aumento actual del precio del combustible y los alimentos.

e) Garantizar que los productos alimentarios básicos estén exentos del IVA

f) Gravar con alícuotas progresivas superiores a las corrientes a la acumulación de riqueza que se encuentra en jurisdicciones offshore de las empresas y personas más ricas.

g) Aumentar los tipos y la progresividad de otros impuestos, como los impuestos sobre las ganancias del capital, la propiedad, la herencia, las transacciones financieras y el ingreso.

h) Garantizar que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden reduciendo prácticas fiscales nocivas, a la vez de reforzar las medidas contra la evasión y elusión fiscal.

Con relación a los servicios públicos:

-Aumentar el gasto en educación pública gratuita, servicios de salud pública, y programas de protección social universal para grupos en situación de vulnerabilidad.

Con relación al derecho laboral:

- Garantizar el derecho de las personas a la sindicación, la huelga y la negociación colectiva, respetando y adoptando todas las leyes necesarias para cumplir con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Aumentar los salarios mínimos para igualarlos al PBI per cápita y establecer posteriormente revisiones semestrales para ajustarlos a la inflación.
- Establecer sistemas para garantizar que el sector informal cumpla con los requisitos reglamentarios mínimos en materia de remuneración y condiciones laborales.
- Establecer sistemas que integren gradualmente a las y los trabajadores informales y vulnerables en los sistemas de protección social.

Cabe notar que las consecuencias de la excepcionalidad sobre la inequidad global resultan inequívocas, ya que el informe del 2022 del Banco Mundial dice expresamente que “En 2020, la pobreza extrema aumentó a nivel mundial por primera vez en más de dos décadas. Muchos países aún están lidiando con los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia de COVID-19, y las tasas de vacunación continúan siendo bajas en las naciones más pobres. La inflación —que ya era elevada— se vio exacerbada por la invasión de Rusia a Ucrania; esto hace que aumente el costo de los alimentos, la energía y otras necesidades básicas y que gran parte de la carga recaiga sobre las personas más pobres y vulnerables. Muchos países también afrontan enormes vulnerabilidades derivadas de la deuda, lo que genera presión sobre sus recursos a la hora de resolver las dificultades económicas y sociales. El cambio climático continúa planteando riesgos a largo plazo, ya que los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos afectan a todos los sectores, desde la agricultura hasta la infraestructura. Por su parte, el aumento de la fragilidad y los conflictos en todo el mundo está profundizando la inseguridad alimentaria, lo que obliga a millones de personas a abandonar sus hogares y agrava la desaceleración de las perspectivas de crecimiento derivada de los dos años de pandemia”. A su vez, el presidente del Banco Mundial David Malpass, en su discurso del 2022 ha dicho: “El mundo se enfrenta hoy a peligrosas crisis que castigan a los países en desarrollo, dañan a las poblaciones pobres y vulnerables, y agravan la desigualdad mundial. Las tasas elevadas de inflación, la guerra en Ucrania, los grandes desequilibrios macroeconómicos y la escasez de energía, de fertilizantes y de alimentos han causado la desaceleración económica mundial más abrupta en 80 años, a la que se sumaron las muertes y los cierres de la economía y de las escuelas provocados por la pandemia de COVID-19. Los países de ingreso bajo y mediano ahora enfrentan un marcado aumento de los precios del gas natural y de los fertilizantes y la peor crisis alimentaria en una década, al tiempo que se esfuerzan por lograr avances para satisfacer sus necesidades de desarrollo a largo plazo, como el suministro de agua potable, el acceso a la electricidad, las habilidades de lectura, la infraestructura de calidad y las inversiones relacionadas con el clima. En la lucha mundial por aliviar la pobreza y elevar los niveles de vida, es probable que 2022 sea uno de los peores años en décadas. La mediana del ingreso real ha disminuido aún más en muchos países, y los trágicos retrocesos en el desarrollo producidos durante la pandemia se han profundizado”... “La desigualdad es un factor importante de desestabilización: los capitales y los ingresos mundiales se asignan principalmente a los países de ingreso alto debido a sus decisiones sobre política fiscal, monetaria y regulatoria. Se prevé que la desigualdad empeorará en los próximos años, por lo que los objetivos de desarrollo quedarán fuera del alcance de muchos países”... “La disrupción del suministro de energía frena el crecimiento, en especial en las economías que dependen de la importación de combustible. El aumento de los precios del gas natural y su escasez ponen en riesgo la provisión de fertilizantes y el rendimiento de los cultivos, desestabiliza las redes eléctricas y provoca el aumento del uso de combustibles altamente contaminantes. El mundo necesita incrementar con urgencia el suministro de energía y ampliar enormemente el acceso confiable a la electricidad en los países más pobres” ... “Una de las principales consecuencias de las crisis actuales es la enorme acumulación de deuda pública. Para muchos de los países más pobres, la carga de la deuda es ya insostenible o corre serios riesgos de entrar en esa categoría. Se necesitará reducir fuertemente el endeudamiento para posibilitar nuevas inversiones y propiciar el crecimiento” ... “Con las políticas vigentes hoy en día en los países acreedores, los pagos de los países más pobres previstos para 2022 y 2023 superarán largamente toda la asistencia para el desarrollo de la que dispondrán”.

Tal semblanza es más que elocuente y no resiste más acotación que poner en valor que fueron expresadas supuestamente por uno de los hombres más poderosos del planeta, que releva el grado de injusticia extrema con el que confronta una gran mayoría de la población mundial y, sin embargo, se reduce a una proclama sugestiva que, aunque contundente en su diagnóstico, difícilmente afecte las directrices generales por las que se despliega la especulación del capitalismo concentrado. Desde el mismo organismo internacional, se exponen todos los condicionantes existentes, Así, el Banco Mundial en el Capítulo 1. Los impactos económicos de la pandemia y los nuevos riesgos para la recuperación, de su Informe sobre desarrollo mundial 2022 agrega:

La pandemia de COVID19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la desigualdad interna y entre los países . Las observaciones preliminares sugieren que la recuperación tras la crisis será tan desigual como sus impactos económicos iniciales: las economías emergentes y los grupos desfavorecidos necesitarán mucho más tiempo para sobreponerse a las pérdidas de ingresos y medios de vida causadas por la pandemia.

En el mismo instrumento se reflexiona sobre la intensificación de las desigualdades internas y entre países en los siguientes términos:

La crisis tuvo un impacto drástico en la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en el curso de una generación, y las desproporcionadas pérdidas de ingresos sufridas por las poblaciones desfavorecidas condujeron a un enorme aumento de las desigualdades internas y entre los países. Según los datos de diversas encuestas, en 2020 el desempleo temporal entre los trabajadores que solo tienen educación primaria completa se elevó en el 70 % de los países. La pérdida de ingresos también fue mayor entre los jóvenes, las mujeres, los autónomos y los trabajadores ocasionales con niveles más bajos de educación formal. Las mujeres se vieron particularmente afectadas por la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo, dado que era más probable que estuvieran empleadas en los sectores más afectados por los confinamientos y por las medidas de distanciamiento social.

Además, el Banco Mundial asevera que la respuesta a la crisis deberá incluir políticas que aborden los riesgos derivados de los altos niveles de deuda pública para garantizar que los Gobiernos preserven su capacidad de apoyar eficazmente la recuperación. Esta es una prioridad importante, dado que los niveles elevados de deuda pública reducen la capacidad de los Gobiernos para invertir en redes de protección social que puedan contrarrestar el impacto de la crisis en la pobreza y la desigualdad y para brindar apoyo a los hogares y las empresas en caso de que surjan contratiempos durante la recuperación. Pero luego, cuando pasan a sus recomendaciones sugieren que, a medida que los Gobiernos retiran gradualmente las medidas de estímulo, los responsables de la formulación de políticas deben establecer un equilibrio entre las consideraciones de equidad y de eficiencia, remitiéndose nuevamente a las lógicas tradicionales del capital de acumulación financiero.

Sin prurito exponen las consecuencias del actual período de contingencias globales, sin establecer ningún refuerzo redistributivo de la renta global para asistir las inequidades que se generen. Así afirma: Los responsables de la formulación de políticas también deberán abordar los riesgos económicos mundiales que pueden amenazar una recuperación sólida y equitativa. Uno de esos riesgos es el ritmo desigual de recuperación de las economías avanzadas y las emergentes. Es probable que la recuperación más acelerada de las primeras precipite un aumento de las tasas de interés mundiales, lo que ejercerá presión sobre los prestatarios a través de aumentos en el costo del servicio de la deuda interna (pública y privada). Esto puede generar incumplimientos en el pago de los préstamos.

Un riesgo externo adicional es la exposición de los sectores público y privado al riesgo cambiario y a la deuda en moneda extranjera. Esto es especialmente importante en los países cuyos sectores financieros dependen del crédito y de los mercados de capital para el financiamiento al por mayor, dado que las instituciones financieras (incluidas las entidades microfinancieras) que se enfrentan a riesgos de refinanciamiento tendrán menos capacidad para otorgar crédito durante la recuperación. La gestión del riesgo cambiario también debe ser una alta prioridad en los países con predominio de empresas estatales que han tomado cantidades significativas de deuda en moneda extranjera en los 10 años posteriores a la crisis financiera mundial. Consecuentemente formula una advertencia, pero no instrumenta nada que mitigue la desigualdad estructural que naturaliza. Esto resulta elocuente cuando analizando los escenarios probables de riesgo, dice en términos neutros: la adopción de políticas fiscales, monetarias y financieras bien diseñadas puede mitigar los riesgos y generar resultados positivos que apoyen la recuperación económica. Sin embargo, al referirse a los países de ingresos medios agrega: Las pérdidas de ingresos derivadas de la pandemia han provocado un deterioro considerable de la salud financiera de los hogares y las empresas, y podrían precipitar un fuerte aumento del número de prestatarios que no pagan los préstamos una vez que se retiren las políticas de apoyo. Esta situación podría, a su vez, poner en peligro la posición de capital de numerosos prestamistas. Por lo tanto, una prioridad importante para los encargados de formular políticas en los países de ingreso mediano es garantizar que el sector financiero siga estando adecuadamente capitalizado y que los entes reguladores y las instituciones financieras establezcan los marcos adecuados para un reconocimiento amplio y acelerado de los riesgos del sector financiero. Consiguientemente, sugiere sostener la rentabilidad extraordinaria de los entes financieros y de la banca privada en general, para el restablecimiento de una economía convencional, sin política de redistribución alguna de las rentas de ese sector, suscribiendo que los responsables de la formulación de políticas deben garantizar que las medidas de apoyo se reduzcan de manera cuidadosa y predecible para evitar una ola de casos de insolvencia e incumplimiento del pago de los préstamos si se retiran las políticas de estímulo antes de que la actividad económica se haya recuperado por completo, avalando con ese criterio desde el erario público, la ventaja diferencial de la banca privada para que no vea envilecido su crédito. Para mayor seguridad de su renta diferencial sugieren solo la medidas tradicionales: Los supervisores bancarios pueden alentar a los bancos a reevaluar los modelos de crédito, adoptar de manera responsable innovaciones en finanzas digitales que se basen en datos alternativos y adaptar los préstamos al prestatario y al entorno crediticio.

En cuanto a las Perspectivas Económicas Mundiales del 2022, el Banco Mundial afirma que Los efectos secundarios de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando el ritmo de la desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca al 2,9 % en 2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos básicos, lo que se suma a las perturbaciones en los suministros; incrementando la inseguridad alimentaria y la pobreza; exacerbando la inflación; contribuyendo a condiciones financieras más restrictivas; aumentando la vulnerabilidad financiera, e intensificando la incertidumbre en materia de políticas. Las perspectivas están sujetas a diversos riesgos de deterioro de la situación, entre ellos la intensificación de las tensiones geopolíticas, el aumento de los factores adversos que impulsan la estanflación, la creciente inestabilidad financiera, las continuas presiones sobre los suministros y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Estos riesgos subrayan la importancia de implementar una respuesta de políticas macroeconómicas y estructurales contundente a nivel mundial y nacional. En lo relativo a América Latina y el Caribe: se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 2,5 % en 2022 y al 1,9 % en 2023... La guerra en Ucrania está teniendo efectos considerables en la región a través del alza de precios de los productos básicos y el debilitamiento del crecimiento mundial. Los ingresos de exportación y la situación fiscal de algunos países exportadores de productos básicos regionales se están beneficiando, pero los efectos económicos positivos se ven contrarrestados por el aumento de los precios al consumidor, una confianza más débil y el aumento de las tasas de interés nacionales y mundiales. La inflación ha aumentado muy por encima de las metas de los bancos centrales en muchos países de América Latina y el Caribe y ha ejercido presión financiera sobre los hogares. Las medidas generales para enfrentar la inflación, así como los precios de los alimentos y los combustibles, se han acelerado

rápidamente. En respuesta, las autoridades monetarias han subido significativamente las tasas de interés oficiales y han indicado que se producirán nuevos aumentos. Los mercados financieros de América Latina y el Caribe mostraron resiliencia a principios de año, pero la situación financiera se endureció notablemente en abril. La COVID-19 se ha mantenido bajo control en la región desde que finalizó la ola de la variante ómicron, pero los cuellos de botella en el suministro global relacionados con la pandemia continúan provocando perturbaciones en la manufactura regional. Se prevé que el crecimiento regional se desacelerará marcadamente hasta llegar al 2,5 % en 2022, luego de un repunte posterior a la pandemia del 6,7 % en 2021. El crecimiento se desacelerará aún más en 2023, a solo un 1,9 %, antes de repuntar ligeramente a un 2,4 % en 2024. La desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de políticas en algunos países. Se espera que el PBI per cápita de toda la región aumente solo un 0,6 % entre 2019 y 2023. Los precios de las principales exportaciones de América Latina y el Caribe serán sustancialmente más altos en 2022, pero los beneficios para el crecimiento se verán limitados por una respuesta lenta de la producción de algunos productos básicos y por el aumento de los costos de los insumos, incluidos la energía y los fertilizantes. Las políticas fiscales y monetarias se basarán ampliamente en el crecimiento a corto plazo, a medida que las autoridades monetarias restringen las políticas para combatir la inflación y continúa la retirada del apoyo fiscal relacionado con la pandemia... La inflación podría permanecer muy por encima de las metas de los bancos centrales, por lo que sería necesario un endurecimiento de las políticas monetarias más rápido, lo que podría precipitar una desaceleración regional aún más pronunciada. Además, en un contexto de crecimiento lento y aumento de las tasas de interés en EE. UU., la tensión financiera podría afianzarse en algunas economías de la región, especialmente si los encargados de formular políticas no pueden comprometerse de manera creíble con las reformas para impulsar el crecimiento de manera sostenible.

Esta síntesis en definitiva solo confirma que las desigualdades persistirán y que los aportes de los entes financieros internacionales seguirán siendo nulos y continuarán comulgando con las estrategias de la dinámica monopolizadora del capital concentrado sin posibilitar alternativa alguna de crecimiento.

Por último, cabe atender que las situaciones de excepcionalidad global y la distribución inequitativa de la renta global se combinan al extremo en la última frontera que está advirtiendo la subsistencia humana, que es la debacle ambiental. Esto resulta elocuente si observamos que las inversiones de los multimillonarios en industrias contaminantes como los combustibles fósiles y el cemento duplican el promedio del grupo de 500 empresas del índice Standard and Poor. Según el último relevamiento de Oxfam del 7/11/22⁶ Las inversiones de tan solo 125 multimillonarios emiten 393 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año, a la huella de carbono total de países como Francia, Egipto o Argentina. Estos multimillonarios poseen un total de 2,4 billones de dólares en 183 empresas y, estas inversiones resultan en un promedio anual de tres millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona,

6 informe Carbon Billionaires: The investment emissions of World's richest people, Oxfam noviembre 2022.